



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020)

REFERENCIA:	SENTENCIA - APELACIÓN
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL – PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	HECTOR JAIME PABON CUARTAS
DEMANDADOS:	COLPENSIONES
RADICADO:	0050013105-020-2016 – 00346

ACTA N°: 41

En la fecha indicada, siendo las **dos de la tarde (2 p.m.)** del día previamente señalado, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por HECTOR JAIME PABON CUARTAS en contra de COLPENSIONES, para pronunciarse en virtud del **grado jurisdiccional de CONSULTA** y por el recurso de APELACION interpuesto por la parte demandante, frente a la sentencia con la cual el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 41** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA¹

El demandante pretende con este proceso lo siguiente: **i)** CONDENE al **COLPENSIONES** a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de la señora HELDA MARIA TORO GIL; **ii)** Intereses moratorios o Indexación de las condenas; **iii)** Costas procesales. Para sustentar sus pretensiones afirmó, en síntesis: **i)** Con ocasión del fallecimiento de Helda María ocurrida el 6 de febrero de 2002, el actor solicitó al ISS el reconocimiento de pensión de sobrevivientes el 13 de marzo de 2003; **ii)** El ISS - hoy Colpensiones- mediante Resolución 057766 del 27 de noviembre de 2003 negó la

¹ Folio 3-6

pensión alegando que la señora Helda María Toro y el reclamante no convivieron bajo el mismo techo compartiendo lecho y mesa de forma permanente ; **iii)** El demandante convivió con la causante en calidad de compañera permanente en forma continua por espacio de 7 años, anteriores a la ocurrencia de la muerte ; **iv)** la pareja no procreó hijos durante el tiempo de convivencia y era la fallecida quien cubría las necesidades económicas del hogar y de su compañero, desde que inició la convivencia hasta el momento de la muerte de la señora Toro Gil.

1.2. LA CONTESTACIÓN DE COLPENSIONES

La entidad contestó oportunamente, en los siguientes términos²: **i)** Frente a los hechos manifiesta que no le constan; **ii)** Se opone a la prosperidad de todas las pretensiones por considerar que carecen de fundamentación fáctica y legal; **iii)** Formuló como excepciones de mérito las de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION, FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACION ADMINISTRATIVA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE PAGAR INTERESES MORATORIOS Y/O INDEXAR LAS CONDENAS, AUSENCIA DE CAUSA PARA PEDIR, PRESCRIPCION, BUENA FE DE COLPENSIONES, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, Y COMPENSACION.

2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del **11 de agosto de 2017** la Juez CONDENÓ a COLPENSIONES al pago de la pensión de sobrevivientes en cuantía mensual equivalente a un salario mínimo, con un retroactivo pensional a partir del 15 de marzo de 2013; ABSOLVIÓ de la pretensión de intereses moratorios, pero CONDENÓ en su lugar a la Indexación que cuantificó en la suma de \$3.318.280; y CONDENÓ en costas a la entidad.

Para adoptar estas determinaciones razonó de este modo: **i)** A partir de la fecha del fallecimiento de la causante el 6 de febrero del 2002, aplicó el artículo 46 de la Ley 100, y encontró acreditados los requisitos; **ii)** En relación con la calidad de beneficiario del actor, luego de valorar el acervo probatorio, concluyó que se había demostrado en el proceso la convivencia de la pareja al momento de la muerte y al menos por dos años atrás; **iii)** Al analizar la excepción de Prescripción, declaró probadas las mesadas causadas antes del 15 de marzo de 2013, porque la demanda fue instaurada en la misma fecha del año 2016, condenando a un retroactivo pensional con 13 mesadas ; **iv)** Para ABSOLVER de la pretensión de Intereses moratorios del art 141 ley 100 de 1993 argumentó que el demandante nunca los reclamó directamente a la entidad y además, que es solo en el marco del proceso que se tiene certeza por COLPENSIONES

² Fls. 22 a 27

que la pensión de sobrevivientes está a su cargo. En su lugar, CONDENÓ a INDEXACION por la suma de \$3'318.280.

3. RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

En la audiencia de trámite y juzgamiento, el apoderado del actor interpuso el recurso, argumentando lo siguiente: **i) Los Intereses Moratorios** deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento de deudor, porque se trata simplemente de un resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor en la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, es decir que la condena a los intereses moratorios tiene un carácter resarcitorio y no sancionatorio; **ii)** Debe concederse la prestación con **14 mesadas al** año, porque la prestación se causó el **6 de febrero del año 2002, antes** del 31 de julio del año 2011.

4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia³, las partes intervinieron oportunamente, así:

El apoderado del **DEMANDANTE** reitera la solicitud referida a que se condene a intereses moratorios y se conceda la pensión con 14 mesadas al año.

Y **COLPENSIONES** a su turno, plantea en su alegación lo siguiente: i) Que lo primordial para ser acreedor de la sustitución pensional es demostrar que estuvo haciendo vida marital con la causante, probando que entre ellos se establecieron los siguientes elementos: cohabitación, singularidad y permanencia por un lapso no inferior a 5 años anteriores al fallecimiento del asegurado; ii) Argumenta que las pruebas del proceso no acreditan estos elementos de la convivencia y para ello invoca las sentencias SL39641 de 2011, SL 680 de 2013 y SL 1067 de 2014; iii) Señala que la entidad obró conforme a la legalidad, pues la negativa de la sustitución obedeció a que el demandante no acreditaba los requisitos legales, señalando que tampoco se demostraron luego de realizar la investigación administrativa. iv) Expresa que no es procedente la condena a intereses moratorios ni a costas, porque el retardo de la entidad en reconocer la prestación no obedece a negligencia.

Pues bien, se ha proferido una **DECISION CONDENATORIA** en contra de COLPENSIONES y al no haber sido apelada por la entidad, en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA, se analizará en primer lugar, el presupuesto NORMATIVO y JURISPRUDENCIAL

³ Artículo 15 Decreto 806 de 2020

SOBRE EL REQUISITO DE CONVIVENCIA EN RELACION CON EL DERECHO DE LOS COMPAÑEROS PERMANENTES, para luego, descender al CASO CONCRETO y verificar si efectivamente el señor PABON CUARTAS acredita la calidad de **COMPAÑERO PERMANENTE** que le haga acreedor de la pensión de sobrevivientes deprecada. En caso afirmativo, se revisarán la liquidación efectuada en la providencia, lo referente a la mesada catorce y las decisiones adoptadas en relación con intereses moratorios y costas.

5. LA NOCIÓN DE CONVIVENCIA COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA QUE EL COMPAÑERO SEA BENEFICIARIO DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES

Por convivencia ha entendido la Sala Laboral de la Corte que es aquella «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605). Así, la convivencia real y efectiva **entraña una comunidad de vida estable**, permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común. **Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida.**

En la sentencia **SL 1399 de 2018**, se ha expresado que los desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja, o la no cohabitación por motivos de fuerza mayor no suponen una ruptura de la convivencia, ni conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de la pareja, **si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua**, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio. **(SL14237-2015, reiterada en SL6519-2017).**

De acuerdo con lo previsto en el **artículo 47 de la Ley 100 de 1993**, es beneficiario de la **pensión de sobreviviente** en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante ~~por lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez~~, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.

El aparte tachado fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional con la sentencia **C 1176 de 2001** y en esa oportunidad la Alta Corporación expuso que el legislador hace una diferenciación entre los casos en que quién fallece es una persona PENSIONADA o AFILIADA, respecto a los requisitos del CONYUGE o COMPAÑERO para ser beneficiarios. Señaló así que en el inciso segundo, se consagra expresamente la frase, **“en caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado”**, es decir, cuando éste, a la fecha de su fallecimiento, era titular de una pensión de vejez o de invalidez por riesgo común, y que desde ese supuesto de hecho, esos requisitos son: **i)** Que conviva con el pensionado al momento de su muerte; **ii)** Que acredite haber hecho vida marital con el causante, por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez o invalidez; **iii)** Que, además, haya convivido con el fallecido no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido. En criterio de la Alta Corporación esos requisitos **sólo hacen referencia a los beneficiarios del pensionado**, no del afiliado, y por ello expresa, textualmente: **“El marco jurídico de esta discusión debe circunscribirse, entonces, al de la persona –el causante- que ha adquirido el derecho a recibir una pensión de vejez o de invalidez.”**

Habiendo dejado claramente consignada la finalidad del legislador al momento de exigir un número de años de convivencia sólo en el caso en que quién fallece es un pensionado, la Alta Corporación pasa a analizar la exigencia establecida por el legislador en el sentido de que la convivencia se hubiese presentado *“por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y”*, y lo declara inexecutable, pero por una razón muy concreta: Después de aplicar un TEST DE PROPORCIONALIDAD, advirtió que éste resulta DISCRIMINATORIO, pues regula un criterio diferenciador entre beneficiarios de pensionados. En conclusión, se declaró inexecutable la exigencia, partiendo de la premisa de que en los eventos de en que quién fallece es un pensionado, **el requisito de 2 años de convivencia al momento de la muerte resulta suficiente.**

La sentencia que se está analizando se apoya en la sentencia con **Radicado 10406 del 17 de abril de 1998** de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral –

“Es pues razonable suponer que las exigencias consignadas en los artículos demandados buscan la protección de los intereses de los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, ante la posible reclamación ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla con justicia.

Acorde con la protección familiar que persigue la norma, y que ha sido resaltada anteriormente, es dable suponer que la preceptiva acusada también busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de continuidad; **pero también, que dicha disposición intenta amparar**

el patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas realizadas por personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital responsable y comprometida, sólo pretenden derivar un beneficio económico de la transmisión pensional.

Con el establecimiento de los requisitos consignados en la norma se busca desestimular la ejecución de conductas que pudieran dirigirse a obtener ese beneficio económico, de manera artificial e injustificada". (Negrilla y subraya intencional)

Pues bien, como consecuencia de la nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia **SL 1730 del 2020** decidió sentar una nueva doctrina frente a la correcta interpretación de lo dispuesto en el **literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003**, apelando a los fines del Sistema Integral de Seguridad Social en general y de la pensión de sobrevivientes en particular; así como con las razones que llevaron a establecer el requisito mínimo de convivencia allí previsto. Así luego de invocar el **artículo 48 la Constitución Política**, la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003 y las sentencias **C-1176-2001, C-1094-2003, C 521 de 2007, C-1035-2008, C-336-2014**, concluyó que de la redacción del precepto legal se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida se encuentra relacionada **únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado**; y que una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinción, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada. En criterio de esta Sala de Decisión, la *Ratio Decidendi* de esta providencia resulta claramente aplicable al **artículo 47 de la Ley 100 de 1993**, pudiendo concluirse que, con este nuevo pronunciamiento, en la actualidad existe identidad de criterios entre las dos corporaciones.

6. CASO CONCRETO.

- Para efectuar el análisis debe partirse de una premisa, y es que, en este caso, no es motivo de discusión que la señora HELDA MARIA TORO GIL falleció el **6 de febrero de 2002**, y que dejó causada la pensión de sobrevivientes porque acreditó más de 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte, tal como de manera expresa lo expresó el Instituto de Seguros Sociales en la **Resolución 015766 del 7 de noviembre de 2003**, señalando que en ese lapso **cotizó 35 semanas**⁴
- Ante el fallecimiento de la señora TORO GIL, el **13 de marzo de 2003** se presentó al I.S.S a reclamar la pensión de sobrevivientes el señor **HECTOR JAIME PABÓN CUARTAS**, pero la prestación fue denegada argumentando lo siguiente: "mediante verificación administrativa que realizó el ISS a través del grupo de verificación de la gerencia seccional de pensiones, una vez practicada las pruebas con respecto de los principios que consagra el artículo 5 de la ley 58 de 1982, esto es con la audiencia de las partes y con la

⁴ Folio 8

relación de los medios de prueba solicitados por el(la) peticionario(a) y decretadas por el instituto, analizados el acervo probatorio se pudo establecer fehacientemente que LA SEÑORA HERLDA MARIA SUAREZ NUNCA CONVIVIO CON EL SEÑOR HECTOR JAIME PABON, BAJO EL MISMO TECHO, COMPARTIENDO LECHO Y MESA DE FORMA PERMANENTE"

- Se advierte entonces que la controversia se presenta es respecto a la calidad de beneficiario del señor **PABÓN CUARTAS**, pues de acuerdo con los ANTECEDENTES de esta providencia, en la DEMANDA se afirma que el actor convivió con la causante en calidad de compañeros permanentes en forma continua por espacio de siete años anteriores a la ocurrencia de la muerte, prodigándose afecto, auxilio mutuo, apoyo económico y acompañamiento espiritual; mientras que COLPENSIONES ha defendido la tesis de que tal aspecto no ha sido probado, afirmando en la contestación que el demandante no ha probado la convivencia efectiva con la pensionada fallecida, tal como lo exige el artículo 47 de la Ley 100.
- La Juez de instancia acogió la tesis de la demanda pues concluyó que en este proceso se había acreditado el requisito de CONVIVENCIA al momento de la muerte de HELDA MARIA TORO y por más de 2 años; y por ello se impone verificar si en este caso se acredita que el demandante pertenecía al grupo familiar de la causante para de este modo, hacerse merecedor a una pensión de sobrevivientes por ostentar la calidad de compañero permanente.
- Pues bien, de acuerdo con el análisis normativo y jurisprudencial definido en el **acápito quinto** de esta sentencia, la calidad de beneficiario del señor **HECTOR JAIME** depende de que se acredite en este proceso una verdadera convivencia con la señora HELDA MARIA para la época de su fallecimiento. Debe destacarse además, que de acuerdo con lo previsto en el artículo **167 del CODIGO GENERAL DEL PROCESO**, disposición normativa en la que se consagra una de las principales cargas procesales cuando se acude a la administración de justicia, referida a la prueba de los hechos que se alegan y se conoce como principio "**onus probandi**"; es a la parte demandante a quien le corresponde acreditar los hechos que invoca en su demanda, y más concretamente lo afirmado en el hecho **QUINTO** referido a que convivió con la causante en calidad de compañeros permanentes hasta su muerte y por espacio de 7 años.
- Pero debe la Sala desde ya anunciar, que efectuada la valoración del acervo probatorio a la luz de lo previsto en el **artículo 61 del Código Procesal del Trabajo**, en este caso la parte demandante cumplió con la carga de probar su pertenencia al grupo familiar de la causante en calidad de compañero permanente singular,

porque para acreditar la convivencia al momento de la muerte de la señora TORO GIL y por lo menos 2 años atrás se allegaron al proceso dos declaraciones extra juicio efectuadas por las señoras MARIA **INES RODRIGUEZ Y MARIA LUZ GARCIA DE GIRALDO** ante el Notario Segundo del Circulo de Itagüí el **21 de febrero de 2000.** _Ambas declarantes afirmaron que la señora Helda María Toro Gil le ayuda económicamente a su compañero Héctor Jaime con quien vive en unión libre **hace 5 años**⁵.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que las declaraciones extra juicio recibidas para fines no judiciales, como las practicadas ante o Notario, pueden tomarse como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 220 del Código General del Proceso, no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite.

- En el proceso se recibió la declaración del DEMANDANTE, sin que hubiese efectuado confesión alguna en contra, quien afirmó la convivencia con HELDA MARIA a partir del **1 de enero de 1995 y hasta el 6 de febrero de 2002**, momento de la muerte de su compañera, sin que se hubiesen separado en este tiempo. Narra que el 1 de enero de 1995 se fueron a vivir juntos a la casa de su madre en el barrio San Francisco y los fines de semana se iban para la casa de las hermanas de su compañera. Cuenta que era su mujer quien compraba el mercado para los dos, cocinaba y lavaba la ropa, y algunas veces la mamá del declarante les colaboraba. Narra que su señora falleció por un cáncer en la matriz en la casa de la hermana, ella estaba afiliada a la funeraria Monseñor, laboraba en confecciones y estaba afiliada a la seguridad social, y él solo trabajaba los fines de semana, siendo beneficiario de su compañera en el I.S.S. Finalmente, informa que después de su fallecimiento como a los 15 días comenzó las vueltas, solicitó al seguro social la pensión, pero en ningún momento hubo visita de los funcionarios de la entidad
- Lo anterior es corroborado en el proceso por **EMILIO DE JESUS LONDOÑO MAZO**, vecino y amigo de la pareja, que le vendía mercancías a crédito a la causante, y los visitaba todos los fines de semana en la casa de las hermanas de la causante y en semana, en la casa de la madre de Héctor, en el Barrio San Francisco. Conoció a la causante hace 23 años, desde 1993 en la casa de sus hermanas, y allá conoció al demandante. Narra que en semana veía a la pareja en la casa de la mamá de HECTOR y los fines de semana los veía era en la casa de las hermanas de HELDA. Cuenta que la pareja nunca se llegó a separar y que la convivencia perduró hasta

⁵ Folio 12

que ella falleció. En vida de HELDA, HECTOR vendía paletas y ella trabajaba en confecciones, y le consta que le colaboraba económicamente al actor porque era a él a quien le compraba ropa y zapatos. Dice que en el barrio los conocían como una pareja, Elda murió de cáncer, en ese momento se encontraba en la casa de las hermanas.

- También declaró **ALBA LUCIA CORTES MONTOYA**, vecina del demandante. Cuenta que conoció a Elda María porque eran vecinas "frente a frente" y muy amigas hasta que falleció. Dice que HELDA y HECTOR JAIME eran esposos, vivían en la calle 65 en el barrio San Francisco, vivían con la mamá de Héctor y la convivencia perduró unos 7 años, no se llegaron a separar: Elda trabajaba en confecciones y Héctor trabajaba vendiendo Helados; ella le compraba lo que era la ropa, pagaba los servicios y entre los dos compraban la comida, cuando a él le quedaba. Cuenta que HELDA murió de Cáncer, estuvo en el hospital de ahí se la llevaron donde las hermanas que ella quería estar allá y HECTOR estuvo con ella hasta que falleció. Finalmente informa que en el barrio como los conocían juntos como pareja, ellos compartieron Techo, lecho y mesa 7 u 8 años hasta que ella cayó a la cama por la enfermedad que a ella le dio, no tuvieron hijos porque estaba en embarazo y en ese momento le descubrieron un cáncer
- Pues bien, a la luz de lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, el conjunto del acervo probatorio orienta el convencimiento de la Sala, a las siguientes conclusiones:

Sea lo **primero** señalar, que los testigos **EMILIO DE JESUS LONDOÑO MAZO** y **ALBA LUCIA CORTES MONTOYA** fueron espontáneos al responder a las preguntas realizadas, en manera alguna se evidencia que hubiesen sido coaccionados a responder dentro de la diligencia, ni que tengan interés alguno en el resultado del proceso. Se advierte que ante todas las preguntas respondieron coherentemente, mostrando mente sana y guardando fidelidad con lo preguntado y, además, declararon sobre lo que le consta, siendo principalmente testigos de que la pareja convivía al momento de la muerte y durante más de 7 años.

En segundo lugar, porque la versión de los testigos en el proceso, coincide con las declaraciones realizadas por el demandante, quien no efectuó confesión alguna en contra, y se advierte por la Sala además, en relación con el inicio de la convivencia, que también coinciden con la afirmación efectuada por **MARIA INES RODRIGUEZ Y MARIA LUZ GARCIA DE GIRALDO** ante el Notario Segundo del Circulo de Itagüí el 21 de febrero de 2000, fecha en la que afirmaron que la pareja vivía en unión libre desde hacía 5 años, remontándola así al **año 1995**.

En tercer lugar, debe resaltarse que si bien el **I.S.S.** en el acto administrativo del **27 de febrero de 2012**, negó la pensión al hoy demandante argumentando que mediante la verificación administrativa realizada por el grupo de verificación de la gerencia seccional de pensiones “se pudo establecer que LA SEÑORA HELDA MARIA SUAREZ NUNCA CONVIVIO CON EL SEÑOR HECTOR JAIME PABON, BAJO EL MISMO TECHO, COMPARTIENDO LECHO Y MESA DE FORMA PERMANENTE”; lo cierto del caso es que al plenario no se allegó la prueba de investigación administrativa alguna, habiéndose afirmado por el actor que jamás se realizó visita domiciliaria.

Finalmente, concluye la Sala que el acervo probatorio del proceso lo que muestra es que entre la pareja se generó una comunidad de vida sustentada en la ayuda mutua, el apoyo económico y la asistencia solidaria; se trató de una relación conocida por los miembros de la familia, vecinos y amigos; acreditándose en el proceso un proyecto de vida de pareja estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- hasta el fallecimiento de la causante y durante varios años anteriores al fatídico hecho, sin que pueda desconocerse tal circunstancia por el hecho de que la vivienda fuese suministrada por sus familiares, atendiendo a la precaria a situación económica: En semana en la de la madre del hoy demandante y los fines de semana, en la de las hermanas de la causante.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que llevará a la Sala a CONFIRMAR la decisión CONDENATORIA de la falladora de primera instancia.

PRESCRIPCIÓN – RETROACTIVO PENSIONAL

La Sala comparte la decisión de declarar probada la prescripción de las mesadas causadas antes del **15 de marzo de 2013**, porque transcurrieron más de 3 años entre la fecha del fallecimiento (**06 de febrero de 2002**) y la fecha de en qué se interpuso la demanda, el **15 marzo 2016 (Folio 6)**, ello en virtud de lo previsto en el **artículo 151 del CPL**.

Ahora bien, la juez de instancia concluyó que valor de la mesada pensional es equivalente al salario mínimo legal vigente en cada año, y calculó el retroactivo con 13 mesadas al año, aspecto controvertido por el apoderado del demandante, a quién le asiste razón, porque al haberse causado el derecho antes de la entrada en vigor del AL 1 de 2005, deben reconocerse las mesadas adicionales de junio y noviembre consagradas en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993

Se actualiza el RETROACTIVO desde el **15 de marzo de 2013** hasta el mes de **julio de 2020**, y se obtiene la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 73.957.980)**

RETROACTIVO PENSIONAL							
Año	IPC	# mesadas				Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2013	1,94%	11,5				\$ 589.500	\$ 6.779.250
2014	3,66%	14				\$ 616.000	\$ 8.624.000
2015	6,77%	14				\$ 644.350	\$ 9.020.900
2016	5,75%	14				\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	4,09%	14				\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	3,18%	14				\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	3,80%	14				\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020		8				\$ 877.803	\$ 7.022.424
						TOTAL	\$ 73.957.980

COLPENSIONES continuará pagando a partir del **1 agosto de 2020**, una mesada pensional equivalente al salario mínimo, con las dos adicionales de junio y diciembre de cada año. La mesada se incrementará anualmente en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

La entidad descontará del valor del retroactivo a pagar los aportes en salud, los que, de acuerdo con reciente sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, operan por mandato legal, sin necesidad de declaración judicial: **(SL 1169 de 2019 – Rad 64.490 del 10 de abril)**

INTERESES MORATORIOS o INDEXACION

La Juez de instancia ABSOLVIÓ de la pretensión de intereses moratorios, argumentando que el demandante nunca los reclamó directamente a la entidad y que es solo en el marco del proceso que se tiene certeza por Colpensiones que la pensión de sobrevivientes está a su cargo. En su lugar, CONDENÓ a INDEXACION por la suma de \$3´318.280.

En el recurso de apelación se insiste en que los **Intereses Moratorios** deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento de deudor, porque se trata simplemente de un resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor en la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, es decir que la condena a los intereses moratorios tiene un carácter resarcitorio y no sancionatorio.

La Sala comparte los planteamientos del recurrente. Sobre la procedencia de estos intereses en caso de retardo en el reconocimiento de la prestación, la Jurisprudencia

de la Sala Laboral de la Corte Suprema ha sido pacífica y reitera la doctrina referida a que se generan por el retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin que para ello resulte menester evaluar las circunstancias por las que el derecho pensional se encontraba en discusión o el actuar de las entidades encargadas del reconocimiento y pago del derecho pensional. **(SL2941-2016)**.

Y aunque se ha consolidado un precedente judicial para exonerar de la imposición de esta condena, en criterio de la sala en este caso no se presentan los presupuestos, porque no estamos frente al cambio de criterio jurisprudencial alguno ni se puede afirmar que la negativa en el reconocimiento de la pensión obedezca a un apego minucioso de la Ley. Por el contrario, se observa que el actor solicitó al I.S.S. la prestación desde el **13 de marzo de 2003** y la entidad la negó a partir de unas afirmaciones que no cuentan con respaldo probatorio alguno.

Se CONDENARÁ a partir del **15 de marzo de 2013**, porque sobre ellos también se declara la prescripción de los causados con anterioridad, en razón de la fecha de la presentación de la demanda.

LA CONDENA EN COSTAS

La CONDENA en COSTAS en PRIMERA INSTANCIA se CONFIRMA porque COLPENSIONES resultó vencida en el proceso. Y al prosperar el RECURSO DE APELACION del demandante, no se causan costas en segunda.

LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECIDE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado VEINTE Laboral del Circuito de Medellín, pero con las siguientes MODIFICACIONES:

- **EL NUMERAL SEGUNDO** en el sentido que el valor a pagar por concepto de retroactivo pensional causado entre el **15 de marzo de 2013** y **julio de 2020**, asciende a la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 73.957.980)**.
- El numeral **TERCERO**, porque a partir del **01 de agosto de 2020**, COLPENSIONES continuará reconociendo la mesada pensional por valor de **1 salario mínimo legal** mensual vigente, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, con el incremento anual previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
- Los numerales **QUINTO y SEXTO** se revocan, porque se CONDENA a COLPENSIONES al pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del **15 de**

marzo de 2013, y hasta la fecha en que se efectúe el pago de las mesadas pensionales objeto de condena en este proceso.

SEGUNDO: Sin costas en esta Instancia.

Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quienes en ella intervinieron. Vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al Despacho de origen.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

CERTIFICO:

Que la presente providencia fue notificada por **ESTADOS N° 96** fijado en la página web de la Rama Judicial el día de hoy.

Medellín, 23 de julio de 2020

Secretario